

C.A. de Santiago

Santiago, catorce de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con las siguientes modificaciones:

1. En el considerando octavo, se elimina su segundo párrafo.
2. En el considerando vigésimo tercero, se elimina la frase “y además la muerte de su hijo en común con posterioridad a causa de las heridas sufridas por la actora como consecuencia de los hechos relatados, y la aflicción y dolor de la pérdida de ambos dentro de dicho contexto”.
3. En el segundo párrafo del considerando vigésimo tercero se eliminan las palabras “y su hijo”.
4. En el considerando vigésimo quinto se sustituye la frase final que comienza con “de esta sentencia...” y termina con la palabra “ejecutoriado” por la siguiente frase “en que la sentencia se encuentre ejecutoriada hasta su pago efectivo, más intereses desde la mora”.

Y se tiene en su lugar y además presente:

1º) Que esta Corte comparte los argumentos del tribunal a quo para desechar las alegaciones fiscales y acceder, en consecuencia a la demanda impetrada.

2º) Que en relación a la alegación fiscal de preterición legal de la demandante por haber deducido la demanda en su calidad de pareja de la víctima Miguel Enríquez Espinoza, cabe desechar tal alegación, por cuanto si bien los beneficios que consagró la ley N° 19.123 abarcó a hijos, cónyuges y padres de las víctimas por violación a los derechos humanos, es lo cierto que nada impide obtener una indemnización por vía jurisdiccional si se demuestra



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XFXDXPXXNKJ

la aflicción o dolor constitutivo de interés directo a causa de tales vejámenes.

En la especie, no puede desatenderse que la demandante lo que busca es la indemnización al daño moral que en ella produjo la muerte de su pareja en las circunstancias que ello se verificó el día 5 de octubre de 1973 siendo asesinado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional en la casa en que la pareja vivía como se asentó en la causa penal rol 309-2012.

Dicho hecho, de suyo traumático, con secuelas de por vida, es constitutivo de un perjuicio de orden moral que el Estado se encuentra obligado a resarcir.

3°) Que no puede tenerse en cuenta para los efectos de la indemnización, la muerte del hijo de la demandante y su pareja, al mes de haber nacido, por no existir elementos probatorios suficientes que permitan atribuir dicho deceso al actuar de los agentes del Estado.

En efecto la única prueba más relevante para tales circunstancias es un informe emitido el 9 de mayo de 1977 desde la maternidad del Hospital de Cambridge, debidamente apostillado y traducido al español, que señala que la madre resultó gravemente herida en un tiroteo a los 7 meses de embarazo, que ella estuvo inconsciente por más de una hora, que fue intervenida quirúrgicamente, que durante una o dos semanas después del accidente el bebé no se movió en el útero, pero que después los movimientos fetales aparentemente volvieron a la normalidad. Se añade que el bebé nació en la maternidad aludida a las 40 semanas de gestación por parto espontáneo, que estaba flácido, que no succionaba, que se le hicieron investigaciones sobre enfermedades metabólicas, infecciones congénitas, etc, que resultaron negativas, que no tuvo mejoría y murió con poco más



de un mes de edad. Agrega: “La autopsia mostró que el cerebro era muy blando y friable, aunque no había cambios histológicos obvios. Por lo tanto, la causa de la anormalidad de este niño fue casi con certeza el prolongado período de hipoxia fetal en el momento del incidente del tiroteo. No tuvimos pruebas de que este bebé fuera congénitamente anormal de ninguna manera o que tuviera alguna enfermedad metabólica hereditaria, etc.”.

Como se ve, dicho documento es insuficiente para establecer la relación de causalidad entre la conducta de los agentes del Estado y la muerte de la criatura, es más y aun obviando la naturaleza de la prueba que hace referencia a una autopsia que no se acompaña, el documento da cuenta de una probabilidad de la causa de la anormalidad pero no una certeza.

Corroborar tal aseveración, la causa de la muerte estampada en el certificado de defunción del niño “Bronconeumonía y anoxia cerebral severa” sin dar cuenta de las causas de la anoxia.

Dentro de este contexto, y dado que la prueba en esta clase de juicio es tasada, no existe certeza para atribuir responsabilidad al Estado en la muerte del niño, por lo que tal deceso no será considerado para la indemnización.

4º) Que, en relación al monto de la indemnización, ha de considerarse que la muerte de un ser querido como lo es la pareja, sin duda provoca dolor y aflicción, más aún en las circunstancias en que se produjo esa muerte, en forma violenta en manos de agentes del Estado siendo todo ello presenciado por la demandante. Pero además, no puede pasarse por alto que la propia demandante en el ataque que se hace a su domicilio fue también herida, sufriendo lesiones que obligaron su ingreso al hospital, siendo auxiliada por vecinos, según dan cuenta los testigos, para luego ser interrogada por agentes de la DINA,



debiendo finalmente salir del país, todo lo cual conduce a aumentar el monto de la indemnización a \$80.000.000 (ochenta millones de pesos).

5°) En cuanto a los reajustes e intereses corresponde establecer que la suma ordenada pagar deberá ser reajustada de acuerdo a la variación que experimente el índice de precios al consumidor para operaciones reajustables entre la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada y la fecha de su pago.

Además deberán pagarse intereses corrientes desde que el demandado se constituya en mora.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, **se confirma** la sentencia dictada el catorce de noviembre de dos mil veintitrés, por el 15° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-20.692-2019, **con declaración** que la indemnización que el Fisco debe pagar a la demandante asciende a \$80.000.000 (ochenta millones de pesos) con los reajustes e intereses fijados en esta sentencia.

Se previene que la Ministra Sra. Merino concurre a la confirmación de la sentencia, en relación a la excepción de prescripción opuesta por el Fisco, teniendo únicamente presente que, la acción civil es prescriptible, pues no hay ningún cuerpo normativo -nacional o internacional- que lo establezca, debiendo, por tanto, aplicarse las normas de derecho común del Código Civil.

Aceptar lo contrario, importaría el establecimiento jurisprudencial de acciones imprescriptibles, en contra del texto expreso de la Ley, en este caso, del artículo 2497 del Código Civil, que dispone que las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, las Iglesias, Municipalidades, Establecimientos y Corporaciones Nacionales y



de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo.

De la cita, es posible concluir que no es efectiva la imprescriptibilidad de la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que ni el Constituyente ni el Legislador la declaran en forma expresa, por lo cual cabe entender la vigencia de la norma general, siendo la prescripción, como institución básica de seguridad jurídica, plenamente aplicable a favor y en contra del Estado, según el caso.

Que, no obstante, y como se viene razonando, resulta pertinente aplicar al caso concreto la institución de la prescripción consagrada en nuestro Código Civil, como también, las figuras implícitas en dicha institución, como son la suspensión, interrupción, renuncia de la prescripción, etc.

En efecto, los requisitos de la renuncia a la prescripción se encuentran en las normas comunes para ambos tipos de prescripciones, específicamente, en el artículo 2494 del Código Civil que dispone: *"La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida. Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor"*.

Además, para que pueda determinarse la existencia de la misma se requiere que la intención de renunciar sea inequívoca, es decir, que se desprenda de un hecho que suponga necesariamente el abandono de un derecho adquirido a través de actos concretos del deudor. Se ha resuelto por la jurisprudencia que debe existir una manifestación de voluntad que sea realizada sin compensación alguna, por mera liberalidad o por moralidad, lo que debe desprenderse de los hechos en forma clara e incuestionable.



Así, de un atento examen de los antecedentes que obran en autos, es posible colegir que sin perjuicio de encontrarse prescrita la acción indemnizatoria, con la publicación de la Ley N°20.874, de fecha 29 de octubre de 2015, el Estado demandado ha reconocido su condición de deudor para con las víctimas de prisión política y tortura, constituyendo esta ley, un acto de renuncia a la prescripción.

En este mismo sentido, y a mayor abundamiento, cabe hacer presente, lo que a juicio de esta Magistratura, constituye el último acto relevante de reconocimiento expreso del Estado en esta materia, se trata de la contestación que éste realizara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el contexto de la demanda que interpusieran en su contra en el caso: “María Laura Ordenes Guerra y otros respecto de la República de Chile”, por la responsabilidad que le cabe al violar los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción a acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad.

En síntesis, y en lo que nos atañe, el Estado manifestó: “[...] *su voluntad de aceptar las conclusiones y las consecuencias jurídicas que de ello se derivan contenidas en el Informe de Fondo adoptado por la CIDH. En particular, señala que faltó al derecho a las garantías judiciales por no determinar el derecho de las presuntas víctimas a obtener una reparación en el ámbito civil. (...) Asimismo, la aplicación de la prescripción civil a las acciones judiciales interpuestas por las presuntas víctimas imposibilitó el otorgamiento de una justa reparación y dificultó hacer uso adecuado del recurso que es idóneo para reparar violaciones a derechos humanos.*”



En cuanto a las reparaciones, el Estado señaló: *“al no existir controversia sobre el objeto principal de este litigio internacional, lo que procede es reestablecer los derechos que se han tenido por vulnerados y determinar el pago de la indemnización a la parte lesionada”*. Así, *“previo a la declaración de medidas de reparación que adopte [esta] Corte, es importante para el Estado formular los siguientes alcances: En primer lugar, las causas judiciales a que se ha hecho referencia a nivel interno han sido tramitadas completamente y las decisiones pronunciadas cuentan con el carácter de cosa juzgada, lo que hace imposible jurídicamente restituir los procesos judiciales para dictar nuevas sentencias.”* (...)

“No obstante, el Estado comparte que las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos no se encuentran sujetas a prescripción; éste es un principio que tiene asidero en la costumbre internacional, anterior a los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que el transcurso del tiempo no puede ser impedimento para que las víctimas y sus familiares obtengan una reparación integral por los daños causados. En segundo lugar, en cuanto a la naturaleza de las medidas de reparación a ser adoptadas por [la] Corte, tornando en cuenta su competencia amplia contenida en el artículo 63.1 de la CADH, el Estado es de la opinión que, dado que la presente causa se origina por la imposibilidad de que un tribunal interno conociera el fondo de una acción cuya naturaleza es indemnizatoria de perjuicios, la reparación adecuada tendiente a hacer desaparecer los efectos de la violación cometida correspondería principalmente en la determinación de una indemnización monetaria (...).”



Lo anteriormente citado, resulta ser una manifestación expresa e inequívoca del Estado de Chile de reconocimiento de la renuncia a la prescripción.

Se previene además por la ministra señora Merino que estuvo por confirmar la sentencia en cuanto al monto de la indemnización que se fijó en primera instancia, sin aumentarlo.

Se previene que el abogado integrante señor Manuel Luna Abarza no comparte el considerando tercero de esta sentencia.

Redactó la ministra Mireya López Miranda.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

No firma el Abogado Integrante señor Luna Abarza, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por no encontrarse integrando.

N°Civil-18915-2023. (acumulada rol 19.378-2023)



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XFXDXPXXNKJ

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mireya Eugenia López M., Maria Paula Merino V. Santiago, catorce de agosto de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a catorce de agosto de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XFXDXPXXNKJ